

**PROCURADURIA 159 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**

Bucaramanga, junio de 2020

HONORABLES MAGISTRADOS

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER**

**MAGISTRADA PONENTE: DRA. SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR.**

Ciudad

**MEDIO DE CONTROL: PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTRESES COLECTIVOS**

**RADICADO: 2017-0330-00**

**ACCIONANTE: CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS LUIS CARLOS PEREZ Y CORPORACION DEFENSORA DEL AGUA, TERRITORIO Y ECOSISTEMAS**

**ACCIONADO: LA NACION- MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, AGENCIA NACIONAL DE HIDRCARBROS ANH, AUTORIDAD NACIONA D ELICENCIAS AMBIENTAES ANLA, DEPARTAMENTO DEL CESAR MUNICIPIO DE SAN MARTIN (CESAR), CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD SUCURSAL COLOMBIA Y CNE OIL & GAS SA.**

El Ministerio Público rinde concepto en el presente medio de control, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la ley 472 de 1998.

**ANTECEDENTES**

Dio inicio a la presente acción el desarrollo del contrato adicional de explotación y producción E&P yacimientos no convencionales de hidrocarburos suscrito el 02 de diciembre de 2015 entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH y la Unión temporal conformada por las empresas **CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD SUCURSAL COLOMBIA Y CNE OIL & GAS SA.**

Según las partes demandantes, el contrato inicial como todos los acos posteriores al mismo tales como la licencia ambiental se aprobaron y expidieron para la exploración y producción de yacimientos convencionales, de forma tal que dentro de sus actividades debían adelantarse en la fase uno, los estudios de sísmica y la

perforación de un pozo exploratorio A3 y en la fase dos la perforación de dos pozos exploratorios A· , sin que se cumpliese con la perforación del pozo A3 de la fase 1 debido a demoras en el tramite del licenciamiento, por lo cual SHELL contratista original solicito modificar su compromiso inicial, requiriendo autorización para reemplazar el pozo exploratorio A3 por un pozo estratigráfico, dando lugar a una modificación del contrato inicial, cuyo objeto según se describe en la resolución 181495 de 2009 consiste en el reconocimiento y muestreo de la columna estratigráfica sin objetivo hidrocarburifero, pozo que fue terminado en febrero de 2015 y una profundidad de 16.406 pies.

Apoyados en los acuerdos No 4 de 2012 y No 03 de marzo 26 de 2014 expedidos por la ANH que permitían a los contratistas que hubieran suscrito contratos adicionales de exploración y explotación de yacimientos convencionales, celebrar contratos adicionales para desarrollar explorar y explotar exclusivamente yacimientos no convencionales, las empresas SHELL. CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD SUCURSAL COLOMBIA Y CNE OIL & GAS SA. **,** solicitaron la cesión de los intereses de SHELL a CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD SUCURSAL COLOMBIA Y CNE OIL & GAS SA., así como la celebración de contrato adicional para desarrollar yacimientos no convencionales de hidrocarburos en el área asignada en el contrato inicial . petición que fue aceptada por su viabilidad, por lo que se suscribió el contrato adicional de exploración y producción E&P yacimientos no convencionales de hidrocarburos, el día 02 de diciembre de 2015.

Como sea que se modificó el objeto del contrato, según las partes demandantes, las partes contratantes debían modificar la licencia ambiental ya obtenida mediante resolución No 857 de 2014. Se obtuvo autorización de la ANLA de cesión de los derechos y obligaciones derivados de la licencia ambiental contenida en la resolución 857 de 2014, según resolución No 0123 del 08 de febrero de 2016, mas no se obtuvo nueva licencia para la actividad relacionada con yacimientos no convencionales. Sin embargo, las partes demandantes afirman que a partir de la pérdida de vigencia de la licencia ambiental otorgada para yacimientos convencionales, las empresas demandadas desarrollaron actividades relacionadas con el programa exploratorio del contrato adicional de yacimientos no convencionales.

El 15 de diciembre de 2015, CONOCOPHILLIPS solicitó a la ANH reclasificación del pozo pico plata 1 de ESTRATIGRAFICO A EXPLORATRIO A3 , con el fin de cumplir las obligaciones de la fase 1 del programa exploratorio del contrato adicional, reclasificación que fue concedida según Oficio 511 -201600111 del 07 de enero de 2016.

**PROBLEMA JURÍDICO**

Subyace en determinar si existe violación o amenaza de violación delos derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio eclógico y el manejo y aprovechamiento nacional d ellos recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, la seguridad pública, la salubridad publica, la moralidad administrativa y a defesa del patrimonio publico de la comunicad del municipio de San Martin y el departamento del Cesar imputable a las demandadas, con ocasión de la actividad de exploración de yacimientos convencionales y / o no convencionales adelantados por las empresas **CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD SUCURSAL COLOMBIA Y CNE OIL & GAS SA.** en el marco de los contratos suscritos por las citadas empresas con la Agencia Nacional d Hidrocarburos ANH suscritos asi: el inicial, el día \_\_\_\_\_\_ y su adicional , el 02 de diciembre de 2015.

**MARCO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIA**

El Artículo 88 de la Constitución Política, dispone que "*La Ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella"*

*"También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones populares.*

*"Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos"*.

De acuerdo con la Ley 472 de 1998, las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior si ello fuere posible –art. 2º-, cuando quiera que por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, sean violados o amenazados -art. 9º-.

En razón a ello el juez popular debe adoptar las órdenes de hacer o de no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, y en general exigir la realización de las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible –art. 34-, de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos vulnerados, como lo exigen los artículos 2º y 88, constitucionales.

La Carta Política garantiza los derechos colectivos si las autoridades encargadas de su protección no cumplen los deberes que les son exigibles al punto de no limitar las decisiones del juez de la acción popular a los hechos, pretensiones y excepciones alegadas y probadas por las partes, como se infiere de los poderes que le otorgó la Ley 472 de 1998, sino que su deber tiene que ver con la adopción de las medidas que sean necesarias para restablecer la cosas al estado precedente a la vulneración del derecho o del interés colectivo, de ser ello posible, como lo demandan los mandatos superiores bajo análisis.

Ahora bien, de la naturaleza, objeto y características de la acción popular, de ninguna manera le resta competencia a las autoridades administrativas para cumplir sus fines o impide al juez entrar a conocer asuntos que son de competencia de estas, ello, de conformidad con los artículos 9º y 10 de la Ley 498 de 1998, que establece la procedencia de la acción popular ***"contra toda acción u omisión de las autoridades públicas*** o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos" y cuando el derecho o interés colectivo se vea amenazado o vulnerado por la actividad de la administración”

**MARCO JURIDICO Y JURISPRUDENCIAL**

Como marco de referencia constitucional encontramos los artículos 79 y 80 de la Carta Política:

*ARTÍCULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.*

*ARTÍCULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de fronteras.*

Descendiendo en el ordenamiento interno encontramos el artículo 1 de la resolución N.° 181495 de 2009 del Ministerio de Minas y Energía, por la cual se establecen medidas en materia de exploración y explotación de hidrocarburos, señala:

*ARTÍCULO 1o. OBJETIVO. La presente resolución tiene por objeto regular y controlar las actividades relativas a la exploración y explotación de hidrocarburos, maximizar su recuperación final y evitar su desperdicio.*

*PARÁGRAFO. El Ministerio de Minas y Energía regulará las actividades relativas a la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales.*

La citada resolución se limitó a regular la exploración y explotación de los yacimientos convencionales, en tanto la regulación de los no convencionales, según el parágrafo transcrito, sería la expedida por el Ministerio de Minas y Energía.

Posteriormente en la resolución N° 180742 de 2012 del Ministerio de Minas y Energía, dictada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o de la Ley 1274 de 2009, el parágrafo del artículo 1 de la resolución N.° 181495 de 2009, citado, y el numeral 4o del artículo 5o del Decreto 381 de 2012, reglamenta los procedimientos para la explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, los define, fija las normas técnicas y estándares, clasifica los pozos de los yacimientos no convencionales en exploratorios y de desarrollo , reglamenta el trámite para la apertura y abandono de pozos estratigráficos y dicta otras disposiciones en materias de pruebas y explotación de este tipo de yacimientos.

A través del el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 1530 de 2012 le encomendó al Gobierno Nacional la definición de los criterios y los procedimientos para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables de forma técnica, económica y ambientalmente eficiente, así como los demás aspectos técnicos, tecnológicos, operativos y administrativos para ejercer la labor de fiscalización. Dicha labor, se entendió como el conjunto de actividades y procedimientos que se llevan a cabo para garantizar el cumplimiento de las normas y de los contratos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, la determinación efectiva de los volúmenes de producción y la aplicación de las mejores prácticas de exploración y producción, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, operativos y ambientales, como base fundamental para la adecuada determinación y recaudo de regalías y compensaciones y el funcionamiento del Sistema General de Regalías (artículo 13 de la Ley 1563 de 2012).

Atendiendo lo anterior, se evidenció la necesidad de revisar los requerimientos técnicos para los pozos de exploración y producción de yacimientos no convencionales y pozos inyectores asociados, en materia de diseño, construcción y operación y se expidió el Decreto 3004 de 2013, el que en su artículo 1 definió como yacimientos no convencionales así:

*“Para los efectos del presente Decreto se entenderá por yacimiento no convencional la formación rocosa con baja permeabilidad primaria a la que se le debe realizar estimulación para mejorar las condiciones de movilidad y recobro de hidrocarburos.*

*Parágrafo. Los yacimientos no convencionales incluyen gas y petróleo en arenas y carbonatos apretados, gas metano asociado a mantos de carbón (CBM), gas y petróleo de lutitas (shale), hidratos de metano y arenas bituminosas.”*

El artículo 2 del Decreto 3004 de 2013, , ordenó al Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con sus competencias y dentro de los seis meses siguientes, expedir las normas técnicas y procedimientos en materia de integridad de pozos, estimulación hidráulica, inyección de agua de producción, fluidos de retorno y sobre otras materias técnicas asociadas a la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales, para adelantar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en los citados yacimientos, a excepción de las arenas bituminosas e hidratos de metano

Lo ordenado se cumplió a través de la resolución N.° 90341 de 2014, que derogó casi en su totalidad la anterior regulación.

El artículo 1 de la resolución que se cita en su Capítulo I del objeto y definiciones, define que su objeto es señalar los requerimientos técnicos y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, con excepción de las arenas bituminosas e hidratos de metano.

Los artículos 2 y 3 reenvían a los procedimientos de la resolución 181495 de 2009 y a las normas ambientales pertinentes, en lo no regulado. De lo anterior, es claro que la resolución N.° 90341 no agotó la reglamentación de la exploración y exploración de los yacimientos no convencionales, sino que autorizó unos reenvíos normativos que permitieran integrar la regulación completa del tema; por su parte, el artículo 4 contiene unas definiciones.

En el Capítulo II, sobre exploración y explotación de yacimientos no convencionales, el artículo 5 regula el sistema de coordenadas de ubicación de esos yacimientos; en el artículo 6 se establecen las exigencias para las operadoras que quisieran perforar uno o varios arreglos de pozos; el artículo 7 regula las pruebas iniciales de producción, una vez concluida la perforación, estimulación y terminación del pozo, la cual tendría una duración no mayor de 45 días; el artículo 8 establece las condiciones para los pozos pilotos en el caso de que las pruebas iniciales determinen que se trata de pozos productores.

Los artículos 9 y 10 regulan los registros y muestreos en pozos exploratorios de yacimientos no convencionales y en pozos estratigráficos.

El artículo 11 establece los requerimientos de cementación para los pozos exploratorios y de desarrollo.

El artículo 12 señala las exigencias para las operaciones de estimulación, y cuando regula los mapas de las fallas geológicas se refiere tanto a pozos verticales como a los horizontales. Ello evidencia que los pozos verticales también son objeto de regulación por parte de la resolución.

El artículo 13 describe y regula las actividades de monitoreo en los pozos de exploración y/o producción, tales como presión anular, material radiactivo de origen natural (NORM) que pueda estar presente en los lodos de perforación o tubería y en el fluido de retorno, sólidos del fluido de retorno y agua de producción, así como el control de sismicidad, en caso de que el Servicio Geológico Colombiano considere que no cuenta con una red adecuada para tal fin. Como se observa, este artículo regula tanto la etapa de exploración como de producción.

El artículo 14 detalla los eventos de suspensión de las actividades de estimulación hidráulica.

El artículo 15 regula los requerimientos para pozos inyectores de fluido de retorno y agua de producción. Detalla la información geológica que se requiere para perforar un pozo inyector, sus exigencias de construcción, la forma de aplicar las pruebas iniciales de inyección, los límites de operación y los requisitos adicionales para pozos que se vayan a convertir en inyectores. Sobre el monitoreo de los pozos inyectores contiene una regulación extensiva a todas las etapas, incluida la de producción, hasta el punto que la integridad de aquellos debe valorarse por lo menos cada tres años. En efecto, en su parte pertinente señala:

*5. Monitoreo:*

*a) Los volúmenes y presiones promedio deberán ser registrados y reportados al*

*Ministerio de Minas y Energía o a quien haga sus veces en materia de fiscalización de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, mediante la Forma 21 o el documento que se establezca para tal fin.*

*b) Todos los pozos inyectores deberán ser equipados con medidores de presión,*

*calibrados según las buenas prácticas de la industria y las recomendaciones del*

*fabricante, en cada uno de los anulares.*

*c) La integridad mecánica del sistema deberá ser valorada por el operador del*

*pozo por lo menos una vez cada tres (3) años.*

*d) En caso que el Servicio Geológico Colombiano no cuente con una red lo suficientemente adecuada (a criterio de dicha Entidad) para detectar sismicidad*

*cerca de los pozos de inyección, se realizará un monitoreo de sismicidad de acuerdo con las especificaciones que establezca el Servicio Geológico Colombiano para tal fin.*

El artículo 16 fija los eventos de suspensión de las actividades de inyección; el artículo 17 describe las actividades que son objeto de inspección por parte del Ministerio de Minas y Energía y, finalmente, el artículo 18 regula el almacenamiento y disposición de material radiactivo de origen natural (NORM) presente en cortes, sólidos, tubería, fluido de retorno o agua de producción durante la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, en el que se remite básicamente a la regulación pertinente sobre la materia.

El 8 de noviembre de 2018, el Consejo de Estado profirió un auto mediante el cual decretó, como medida cautelar, la suspensión provisional del Decreto 3004 de 2013 y de la Resolución 90341 de 2014 del Ministerio de Minas y Energía que fijaron los criterios que deben observarse para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales con la técnica de estimulación hidráulica (Fracking). El auto, cuyo ponente fue el consejero Ramiro Pazos Guerrero, configura un precedente importante en el marco del debate actual sobre la utilización de esta técnica de exploración de petróleo en Colombia.

Conforme a lo expuesto se concluye que la normativa en estudio, actualmente suspendida, regula la perforación de pozos de exploración y producción, horizontales y verticales, pozos inyectores, las actividades de estimulación hidráulica, así como algunas cuestiones relacionadas con la producción, en particular, en los artículos 13 y 15. Lo anterior, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 2 del Decreto 3004 de 2013. Se concluye de lo anterior , las normas que reglamentan la forma de explorar y explotar técnicamente los yacimientos no convencionales están contenidas en las disposiciones suspendidas y, por consiguiente, este tipo de actividades se encuentran temporalmente sin reglamentación

.

Por consiguiente, actualmente, los yacimientos no convencionales regulados en la normativa suspendida no pueden explorarse ni explotarse, en particular, a través de la técnica de estimulación hidráulica y en los pozos que se desarrollan en esas normas.

No obstante lo dicho, la suspensión provisional decretada tiene efectos hacia el futuro y, en esa medida, los proyectos de exploración y/o explotación que hubieran finalizado al amparo de la referida disposición no quedan cobijados por sus efectos, por tratarse de situaciones fáctica y jurídicamente consolidadas o superadas, **a menos, claro está, que existan evidencias técnico-científicas que demuestren que aún después de clausurados los pozos afectan bienes jurídicos superiores, como el medio ambiente o la salud pública.** Ahora, respecto a los pozos que aún están operando, en cualquiera de sus etapas, incluida la de producción, están bajo el amparo de la medida de suspensión provisional impuesta, hasta el punto que las disposiciones de la resolución N.° 90341 de 2014 les alcanzan y, además, son la extensión y el resultado de la fracturación la suspensión provisional de los actos administrativos tiene efectos hacia el futuro; sin embargo, cuando los efectos de las disposiciones suspendidas se extienden en el tiempo, es necesario que estos también se suspendan con el fin de garantizar la efectividad de la medida.

Al adoptar la medida de suspensión el H. Consejo de Estado analizó si los actos administrativos por medio de los cuales el Gobierno Nacional fijó los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales podrían acarrear afectación grave al medio ambiente y a la salud humana, concluyendo respecto al principio de precaución, que los argumentos y justificaciones señalados en las regulaciones demandadas se basaron en la implementación de medidas encaminadas a “paliar riesgos o daños potenciales”, por lo que afirmó que la existencia de los mismos era un hecho; argumento que reforzó con el contenido de un informe expedido por la Contraloría General de la República en noviembre del 2012, mediante el cual esta entidad había advertido en su momento sobre los riesgos geológicos del *fracking*, debido al aumento de sismicidad, la afectación del recurso hídrico y a la salubridad por los fluidos utilizados en la estimulación, aún más en las zonas de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos.

El despacho señaló que pese a que las autoridades gubernamentales propiciaron diferentes medidas para superar estos reparos, aún subsisten dudas sobre la suficiencia y pertinencia de las mismas, razón por la cual consideró pertinente dar aplicación al principio de precaución; aunado al hecho que en su concepto en Colombia dicho principio “debe extremarse exponencialmente”, dadas las limitantes logísticas, financieras y científicas respecto al *fracking*, dando especial importancia al hecho que la topografía de nuestro país impone retos ambientales particulares, considerando necesario, proporcional y adecuado el decreto de la medida solicitada.

 La Alta Corporación ha sido clara en reconocer que desconoce el contexto general en el cual se expidieron las normas señaladas, las cuales obedecen a un proceso juicioso de más de 10 años, tiempo durante el cual las diferentes entidades estatales estructuraron en paralelo las normas técnicas, contractuales y ambientales para hacer viable el desarrollo de recursos que hasta ahora no habían sido posibles en el país, por falta de dicha normativa y por la ausencia de compañías que tuvieran la experiencia y el músculo financiero para hacerlo, ya que la exploración de los mismos requiere de muchos estudios técnicos y significantes inversiones de capital desde el inicio. De igual forma consideró que su estudio es incompleto pues no hizo un análisis exhaustivo de las normas existentes en materia ambiental que regulan esta técnica, en especial la Resolución 421 de 2014, por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para los proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos, el cual se considera como un estudio crucial previo al momento de decidir sobre los efectos e impactos de tipo ambiental en un prospecto exploratorio determinado, pues es **solo a partir de este tipo de normas que se podría llegar a analizar y concluir realmente si esta técnica es o no adecuada para las especificidades de tipo geológico y ambiental en Colombia.**

Para la Corporación de cierre no existe certeza científica absoluta sí existían, pruebas mínimas de daños potenciales derivados de la aparente deficiencia de las medidas adoptadas en los actos administrativos que autorizan la técnica cuestionada, toda vez que Colombia no ha experimentado los efectos de la aplicación de esta técnica en yacimientos no convencionales de una manera tangible, pues a la fecha no se ha expedido la primera licencia ambiental al respecto y por tanto no pueden establecerse ni siquiera “pruebas mínimas” de los eventuales impactos que podría llegar a generar esta técnica, pues aun no es una realidad en terreno.

**CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO**

Esta Procuraduría encontró dentro de la argumentación fáctica como jurídica de la demanda imprecisiones que traen confusión, para del amplio debate probatorio y la normatividad que se aplica al asunto objeto de estudio, es viable aclarar los conceptos técnicos con la realidad histórica.

En cuanto al pozo Pico Plata 1, debe precisarse que se en principio se concibió como un pozo estratigráfico, como sea que antes de ejecutar el objeto contractual se autorizó su perforación, el cual a su vez, posteriormente fue objeto de reclasificación según autorización de la ANH. La clasificación de los pozos la encontramos en la Resolución 18 0742 del 16 de marzo de 2012, en pozos estratigráficos, pozos exploratorios y pozos de desarrollo ( arts. 9, 11 y 12), bajo en entendido que para la primera categoría, esto es los estratigráficos no se requiere de licencia ambiental, mientras si para los pozos exploratorios y d e desarrollo, tal como se desprende de las revisiones del art. 2.2.2.3.2.2. del decreto 1076 de 2015 que fijo las competencias de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y prescribió:

*La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- otorgará o negará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades:*

*1. En el sector hidrocarburos:*

*a) Las actividades de exploración sísmica que requieran la construcción de vías para el tránsito vehicular y las actividades de exploración sísmica en las áreas marinas del territorio nacional cuando se realicen en profundidades inferiores a 200 metros;*

*b)* ***Los proyectos de perforación exploratoria por fuera de campos de producción de hidrocarburos existentes, de acuerdo con el área de interés que declare el peticionario;***

*e)* ***La explotación de hidrocarburos que incluye, la perforación de los pozos de cualquier tipo,*** *la construcción de instalaciones propias de la actividad, las obras complementarias incluidas el transporte interno de fluidos del campo por ductos, el almacenamiento interno, vías internas y demás infraestructuras asociada y conexa;*

*d) El transporte y conducción de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se desarrollen por fuera de los campos de explotación que impliquen la construcción y montaje de infraestructura de líneas de conducción con diámetros iguales o superiores a seis (6) pulgadas (15.24 centímetros). incluyendo estaciones de bombeo y/o reducción de presión y la correspondiente infraestructura de almacenamiento y control de flujo; salvo aquellas actividades relacionadas con la distribución de gas natural de uso domiciliario, comercial o industrial;*

*e) Los terminales de entrega y estaciones de transferencia de hidrocarburos, entendidos como la infraestructura de almacenamiento asociada al transporte de hidrocarburos y sus productos y derivados por ductos;*

*f) La construcción y operación de refinerías y los desarrollos petroquímicos que formen parte de un complejo de refinación;*

De lo enunciado en la norma, se advierte que son los pozos exploratorios y lo pozos de desarrollo aquellos que exigen el diligenciamiento previo de licencia ambiental.

Como segundo aspecto a aclarar, es que la demanda refiere que las partes contratantes para modificar el objeto del proyecto de exploración y producción, hicieron expresa su voluntad de renunciar a la exploración y producción de yacimientos convencionales , dándose una terminación arcial del contra inicial; afirmación que dista de la realidad en cuanto al formarse el contrato adicional el 2 de diciembre de 2015 no se consignó parte alguna del acuerdo de voluntades dicha restricción, por lo que debe concluirse que lo que se realizó fue una ampliación del objeto contractual, sustentado en el acuerdo 03 de 2014 de la ANH que autorizó a los titulares de los contratos de exploración y producción de cambio de exploración de yacimiento convencional desarrollar yacimientos no convencional, adicionando los contratos existentes.

Ahora bien, em lo que respecta a la modificación de la licencia ambiental, la misma disposición citada prevé :

***ARTÍCULO     2.2.2.3.7.1. Modificación de la licencia ambiental.****La licencia ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos:*

*…..*

*9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto.*

*Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control, caso en el cual se deberá obtener la correspondiente licencia ambiental.*

Ahora bien, frente a este aspecto la ANLA informó al proceso que no medio solicitud de modificación de la licencia ambiental, por lo cual la autoridad ambiental mediante oficios de 13 de abril de 2016 y 13 de enero de 2017 efectuó requerimientos para que se modificara la licencia ambiental , como sea que la licencia 857 de 2014 se encontraba vigente y sin modificar ampliando el objeto.

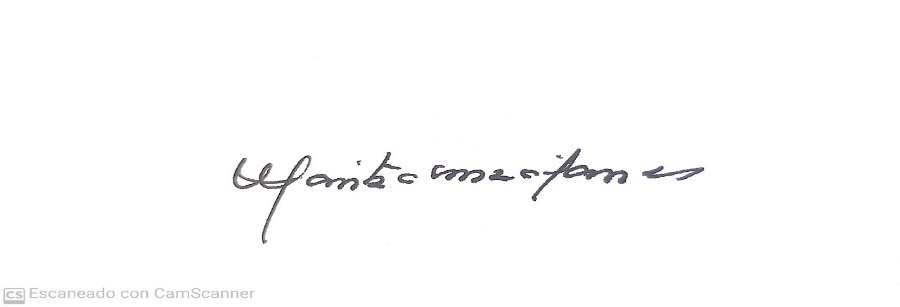
No obstante lo anterior, ANLA pudo verificar que la infraestructura no evidenció desarrollos de pruebas en yacimientos no convencionales, sino estructura de uso y aprovechamiento de recursos naturales asociados a operaciones de tipo convencional, por lo que no se advirtió irregularidad alguna o situación de ilegalidad que menoscabe el medio ambiente. Igualmente se conoció que en septiembre de 2016 la empresa contratista allegó el plan de manejo ambiental para actividades complementarias y pruebas de producción del pozo explotorio Pico Plata 1 y que en los controles efectuados por la ANLA no evidenciaron técnicas de haberse adelantado actividades propias de los yacimientos no convencionales , concluyendo que por las características del pozo Poco Plata 1, las actividades de la fase 1 certificadas por la ANH, como actividades típicas de perforación tradicionalmente ejecutadas em la explotación convencional en Colombia ejecutadas con base en los parámetros de la resolución 857 de 2014.

Aunado lo anterior, el material probatorio allegado al expediente es suficientemente claro en demostrar que el caso de estudio no se efectuó actividad de fracking en el Pozo Pico Plata 1 ni se causo daño alguno al medio ambiente, como tampoco amenaza o afectación de los intereses y derechos colectivos señalados en el escrito incoatorio como vulnerados.

Así, los peritos EDWAR TOVAR Y MAURICIO CARDEÑOSA lo expusieron ante la honorable Corporación que durante las actividades realizadas al pozo , para la estimulación y prueba del pozo NO se realizaron actividades definidas como fracking, entendida esta tecnología como el fracturamiento hidráulico multietapas en perforaciones horizontales con alta densidad de uso de agua y que las tecnologías empleadas corresponden a las utilizadas por la industria del petróleo por más de 70 años, como sea que desde los años 50 se ha venido usando en Colombia la estimulación hidráulica en yacimientos convencionales y que los yacimientos no convencionales no requieren de forma exclusiva para su producción el fractura miento hidráulico multietapas en perforaciones horizontales denominado fracking, pues existen yacimientos de rocas naturalmente fracturadas que permiten explotar yacimientos no convencionales sin fracturamiento hidráulico. Es que no solo lo dicen los peritos, sino el Ministerio de Minas y Energía y la ANH son coincidentes en afirmar que el Colombia no se ha realizad fracking. Y los testigos técnicos traídos al proceso Ingenieros de petróleos JOSE ALIRIO ORTIZ TOVAR, BERNY JOSE MENDEZ CASTRO Y JIMMY ANDRES ROJAS SANCHEZ, este utimo quien a su vez presento unas maquetas ilustrativas de lo que son los yacimientos y la tecnología del fracking.

De igual forma y tal como se anuncio por los accionados en la audiencia del pacto de cumplimiento el Poso Pico Plata 1 fue sellado y en el procedimiento técnico de abandono, se evidencia que en el mismo se finalizó toda actividad al verificarse su taponamiento desde el año de 2017

Significa lo anterior, que durante la actividad de exploración, como durante el proceso de sellamiento o abandono del pozo pico plata 1 y en lo corrido hasta 2020, no se ha sucedido afectación grave al medio ambiente, ni a los bienes jurídicos protegidos mediante el ejercicio del medio de protección a los derechos e intereses colectivos, diferentes a las regulares de la actividad de exploración aceptables y corregibles desde el punto de vista ambiental. Bajo tales consideraciones, la suscrita Procuradora, solicita respetuosa a la H. Corporación, declarar que en el caso de estudio no se evidenciaron a través de los medios probatorios traídos al informativo, y practicados con audiencia y contradicción de las partes y demás intervinientes, las amenazas y afectaciones anunciadas como sustento de las pretensiones de la demanda y en consecuencia denegar las pretensiones y condenar en costas a las partes demandantes.

**Atentamente,

***NELLY MARITZA* GONZALEZ JAIMES**

PROCURADORA 159 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS